

**WORLD RAINFOREST MOVEMENT
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES**

Secretariado Internacional
Ricardo Carrere (Coordinador)
Maldonado 1858; CP 11200
Montevideo - Uruguay

Tel: +598 2 413 2989
Fax: +598 2 410 0985
E-mail: wrm@wrm.org.uy
Sitio web: <http://www.wrm.org.uy>

Boletín N° 99 del WRM
Octubre 2005
(edición en castellano)

En este número:

NUESTRA OPINION

- Cambio climático: ¡paren la música! 2

LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

AMERICA DEL SUR

- Brasil: Aracruz - ¿sustentabilidad o todo sigue igual? 3
- Chile: celulosa lleva la muerte hasta el mar 4
- Colombia: una ley forestal para negocio de capitales extranjeros 5
- Perú: el madereo ilegal, fuente del trabajo forzado en la Amazonía 7

AFRICA

- Camerún: el significado de la pobreza para los Bagyeli 8
- Madagascar: minas de ilmenita a cambio de bosques y gente 9
- Sudáfrica: los monocultivos forestales son un camino a la pobreza 10
- Tanzania: ¿privatización o piratización de nuestros bosques? 11

ASIA

- India: los Adivasi y el manejo de los bosques 13
- Indonesia: un parque nacional, su fracaso y su impacto sobre el sustento de la gente 14
- Laos: ¿ayuda o incitación? El desplazamiento interno y las agencias de ayuda internacional 16
- Tailandia: el proyecto de "Ley de bosques comunitarios" amenaza con desalojar a las comunidades rurales que habitan zonas de conservación de bosques 18

OCEANIA

- Australia: Nippon Paper en el sudeste de Australia 20

FSC: REVISION DE CERTIFICACION DE PLANTACIONES

- Se solicita al FSC moratoria a la certificación de plantaciones 22

NUESTRA OPINION

- Cambio climático: ¡paren la música!

El cambio climático ya está ocurriendo. Los recientes huracanes en el Caribe, Centroamérica, México y el sur de Estados Unidos, que dejaron gran cantidad de muertes a su paso, no son hechos naturales normales: son desastres provocados por los humanos, resultado de causas bien conocidas. Si estas causas no se encararan con seriedad, millones de personas seguirán sufriendo los impactos del cambio climático, que abarca desde sequías extremas a tormentas e inundaciones extremas.

A pesar de sus compromisos declarados, los gobiernos tanto del Norte como del Sur hasta ahora han hecho poco para resolver el problema. Se dice que mientras Roma ardía, Nerón tocaba la lira. Hoy se está dando una situación similar: mientras arden los combustibles fósiles y los bosques, nuestros gobiernos se ponen a tocar la lira, simulando que el mercado terminará resolviendo el problema. Desgraciadamente, no lo hará. Por el contrario, es el mismo mercado quien hace que lo absurdo parezca razonable y que lo razonable parezca imposible.

Pretender que la plantación de millones de hectáreas de árboles "compensará" de algún modo las emisiones de carbono provocadas por la quema de combustibles fósiles es claramente un absurdo. Es obvio que el depósito de carbono biosférico neto continuará aumentando al extraerse más carbono del subsuelo e inyectarlo en la biosfera. Pero al mercado, sin olvidar la industria del petróleo, le encanta esta visión. Se ha creado una nueva mercancía, el carbono, con la que se podrá hacer mucho dinero. El absurdo se ha vuelto razonable.

Nosotros, ellos, todo el mundo sabe que es necesario tomar medidas políticas drásticas, sin importar si son o no económicamente sensatas. Cuando un ser querido está gravemente enfermo nadie piensa en términos del dinero que costará salvarlo sino que se hace todo lo necesario para salvar esa vida. El clima del planeta está muy enfermo y se necesita un enfoque similar. La prioridad de la agenda debería ser la eliminación de los combustibles fósiles lo antes posible. Esto sería lo razonable. Pero intereses económicos profundamente enquistados se oponen a esto y lo declaran "inviabile". El segundo punto de la agenda debería ser detener la deforestación, pero las "fuerzas del mercado" siguen promoviendo la destrucción de los bosques en aras del lucro económico, haciendo que la conservación de los bosques se vuelva imposible.

Sería muy simple echarle la culpa al actual presidente de EEUU, pero la verdad es que hay muy pocos gobiernos, si es que hay alguno, que estén haciendo algo para tratar el problema del cambio climático con seriedad. Las empresas petroleras del Norte y del Sur siguen explotando y explorando para tener aún más petróleo. Se hace que el petróleo sea barato y se hace que las energías alternativas sean caras. La eficiencia y la conservación de la energía no son más que medidas marginales superficiales para tranquilizar al público en cuanto a que se está haciendo algo. Algunas zonas de bosques se declaran "protegidas" de forma de permitir que continúe la destrucción de los bosques restantes. Las plantaciones forestales como sumideros de carbono siguen instrumentándose en el Sur a pesar de que son absurdas.

En este contexto, la única solución posible está en manos de la gente común, que todavía es capaz de distinguir entre lo razonable y lo que no lo es. Es la gente quien presionará a los gobiernos para que instrumenten las medidas necesarias para detener el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Nerón puede haber tenido la excusa de su locura, pero nuestros gobiernos no. El mensaje de la gente tiene que ser fuerte y claro: ¡paren la música y hagan algo ya!

● inicio

LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS

AMERICA DEL SUR

- Brasil: Aracruz - ¿sustentabilidad o todo sigue igual?

Hace seis meses, un grupo de indígenas Tupinikim y Guaraní reclamaron al gigante brasileño de la celulosa, Aracruz Celulose, poco más de 11.000 hectáreas de sus tierras. Talaron miles de eucaliptos para demarcar su territorio y allí construyeron dos aldeas indígenas con una gran casa comunal y muchas otras casas donde están viviendo varias familias indígenas.

Hace pocos días unos 300 indígenas Tupinikim y Guaraní y personas que los apoyan ocuparon durante 30 horas la sede de la administración central del complejo de Aracruz en protesta por la injerencia de la empresa en el proceso de reconocimiento oficial de sus derechos territoriales.

Los pueblos Tupinikim y Guaraní han intentado recuperar sus tierras de manos de Aracruz desde 1979. En 1997 la FUNAI reconoció 18.071 hectáreas como pertenecientes a los Tupinikim y Guaraní. Sin embargo, solamente pudieron recuperar unas 7.000 hectáreas de estas tierras a causa de las presiones ejercidas por Aracruz sobre el gobierno federal.

Aracruz Celulose inició sus operaciones relacionadas con las plantaciones en el estado brasileño de Espírito Santo en 1967, durante la dictadura militar que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985. "Cuando la empresa llegó, la gente se fue. No pudieron hacerles frente. Los obligaron a irse e incluso los amenazaron", relató en 1994 Eugenio Francisco, un Tupinikim de la aldea de Lancha, a los investigadores de la FUNAI, el organismo brasileño encargado de los asuntos indígenas. "La empresa se quedó con todo", añadió.

Aracruz construyó su primera fábrica de celulosa en un lugar donde existía una aldea Tupinikim llamada la Aldea de los Monos. Aracruz obligó a aproximadamente 7.000 familias a abandonar la tierra que ocupó.

Hoy Aracruz es el mayor productor de pulpa blanqueada de eucalipto del mundo. En 2004 la empresa produjo 2,5 millones de celulosa, el 97% de la cual se exportó. Los mayores clientes de Aracruz son Procter & Gamble y Kimberly Clarke, que conforman el 45% de las ventas de la empresa.

Aracruz posee 252.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos en los estados de Minas Gerais, Bahía, Rio Grande do Sul y Espírito Santo. Además la empresa dirige un "Programa de Socios Forestales" que abarca 71.000 hectáreas de eucaliptos plantados y administrados por agricultores.

Para hacer lugar para sus plantaciones, Aracruz destruyó más de 50.000 hectáreas de la selva conocida como Mata Atlántica. La selva fue atravesada por tractores que avanzaban de a dos unidos por una cadena, destruyendo todo a su paso. Los animales fueron aplastados por las máquinas o los árboles que caían. Aracruz también fue multada por el IBAMA, el organismo brasileño encargado de la protección del medio ambiente, por plantar en zonas protegidas.

Se han secado ríos y arroyos a consecuencia de las plantaciones de eucaliptos de Aracruz. La empresa ha construido represas y ha desviado el agua del río Doce hacia sus fábricas, con lo que se agrava más la situación de los cursos de agua de la región. La pesca ha desaparecido en gran medida en muchos de los ríos de la zona.

En un intento por mejorar su imagen, en enero de 2004 Aracruz contrató a una empresa consultora basada en el Reino Unido llamada SustainAbility (sustentabilidad). SustainAbility fue fundada en 1987 por John Elkington, autor de libros como "Los capitalistas verdes" y "La guía verde de negocios", que describe su trabajo de los últimos 25 años como "centrado más que nada en lograr la sustentabilidad con los negocios, mediante los mercados".

SustainAbility está elaborando un plan de sustentabilidad para Aracruz. Jodie Thorpe, de SustainAbility, explicó que la consultora "identificó como prioridades iniciales para mejorar, tres esferas de la estructura de Aracruz: compromiso de los accionistas, transparencia y gobierno".

Pero en el sitio web de SustainAbility hay muy poca información sobre Aracruz y absolutamente nada sobre los antecedentes de la empresa. No se menciona la lucha de los Tupinikim y Guaraní por la tierra.

Ninguno de los informes elaborados por SustainAbility está disponible para el público. "Aunque fomentamos y apoyamos la transparencia, espero que Ud. pueda entender que no tenemos la libertad de hacer público este trabajo", explicó Thorpe.

Lejos de criticar a Aracruz, el sitio web de SustainAbility declara que "El compromiso de Aracruz Celulose con la sustentabilidad es de larga data".

Le escribí a Elkington para preguntarle cómo contestaba las críticas a SustainAbility por ayudar a "maquillar de verde" a una empresa controvertida. "Esa no es para nada la intención", respondió. Elkington explicó que el sitio web de SustainAbility se refiere al "claro compromiso empresarial" con la sustentabilidad. "Yo pienso que no se puede negar que Aracruz todavía tiene que trabajar mucho antes de declarar que es algo parecido a una 'empresa sustentable'", escribió. En este punto, entonces, estamos de acuerdo.

Visité Aracruz en agosto de 2001. Estuve allí para participar de un seminario internacional sobre los impactos de las plantaciones de eucaliptos. También se invitó a Aracruz. Yo estaba esperando poder escuchar a los funcionarios de Aracruz respondiendo a cientos de integrantes de las comunidades que conviven con los impactos provocados por la empresa. Sin embargo, Aracruz no concurrió al seminario.

Mientras estuve allí visité aldeas Tupinikim y Guaraní y me enteré de los problemas a los que se enfrentaban desde que Aracruz había invadido su tierra. Pude ver vastas zonas estériles, cubiertas de plantaciones industriales de eucaliptos. Una de las aldeas Tupinikim que visité estaba rodeada de plantaciones. Vi la enorme y maloliente planta de celulosa de Aracruz. Me contaron cómo la empresa se deshace de sus aguas residuales por la noche. Y junto a cientos de personas participé de una marcha por Espíritu Santo para protestar contra las actividades de Aracruz.

Hace pocos años Elkington escribió que "Gran parte de lo que pasa por desarrollo sustentable se parece mucho a lo de siempre". Al parecer, la empresa consultora de Elkington, SustainAbility, está demostrando que esta declaración es válida.

Por Chris Lang, correo-e: chrislang@t-online.de

● inicio

- Chile: celulosa lleva la muerte hasta el mar

Celulosas Arauco y Constitución, más conocida como Celco, la fábrica de producción de celulosa en Valdivia, perteneciente al grupo chileno Angelini, reabrió recientemente sus operaciones luego de haber cerrado 64 días tras el escándalo suscitado por una mortandad masiva de cisnes de cuello negro en el santuario del río Cruces, donde descargaba sus efluentes.

Días antes de la reapertura, la empresa había recibido el espaldarazo del presidente Ricardo Lagos y de las autoridades ambientales locales para tomar esta decisión. Al anunciar la reapertura, la empresa afirmó que "ha sacado experiencia" y pidió "disculpas a la comunidad de Valdivia por las molestias e inquietudes que debió enfrentar".

"La planta está en condiciones de reanudar la operación, pero con su capacidad de producción limitada al 80%, debiendo hacer cambios e inversiones tecnológicas para lograr ajustarse a las nuevas exigencias establecidas por

la Comisión Regional de Medio Ambiente - X Región y poder volver a su producción originalmente autorizada", comunicó la empresa.

Celco adoptó también otras disposiciones. Para empezar, resolvió poner en marcha el proyecto de llevar el ducto al mar, aduciendo que esta solución fue "reiterada por el propio Presidente de la República en su reciente visita a Valdivia" y que cuenta con la aprobación de la Corema (Comisión Regional de Medio Ambiente).

La propia gerencia de la Planta Celco reconoció recientemente la alternativa de transportar y verter riles hacia el mar por ductos que desembocarían en algún sector entre las zonas de la caleta Queule o las cercanías de Puerto Saavedra, a cambio de participar en la construcción de un nuevo puerto marítimo en la zona, lo que beneficiaría a las empresas forestales pues podrían sacar directamente sus productos de la zona para la exportación.

El proyecto afectaría directamente a las comunidades costeras Mapuche Lafkenche, que se extienden hasta la zona sur de la VIII Región y para quienes el mar es fuente de recursos a través de la pesca. Ya las organizaciones Mapuche y ambientalistas de la IX Región lo habían anunciado en la movilización que se denominó "Encuentro en la diversidad por la defensa de los derechos ambientales" realizada en Temuco el 9 de julio.

Por otra parte, una manifestación en el puerto de Valdivia, con la participación de embarcaciones de distintas caletas de la provincia, los sindicatos y asociaciones de pescadores, organizaciones sociales y comunidades Mapuche-Lafkenche de la región, expresó su rechazo a la salida del ducto de la planta al mar.

"La bullada tecnología de punta anunciada por la planta de celulosa, ya dejó su evidencia en el río Cruces y ahora pretenden que eso llegue al mar. Le digo aquí al señor Ricardo Lagos, que ese ducto no va a salir al mar, porque nosotros nos opondremos", expresó Eliab Viguera, del Comité de Defensa del Mar.

"La alta peligrosidad del emisario de la planta de celulosa que, aun con tratamiento terciario provocó la muerte del humedal (...) quedó demostrada en el estudio que llevó a cabo la Universidad Austral de Chile, que es el único estudio serio y de rigor científico de dominio público", declaró uno de los manifestantes.

Para muchas empresas y gobiernos, esta evidencia representa sólo un problema de relaciones públicas. Contratan así a consultoras de opinión pública, cientistas y asistentes sociales, pero para estudiar "cómo vender mejor el producto", en este caso el proyecto de inversión, porque sus decisiones son inamovibles.

Así se postergan las crisis, las empresas lucran y las poblaciones afectadas, para hacerse oír, deben llevar sus movilizaciones a los extremos de la confrontación. Cuando estalla, los poderes se "sorprenden" y piden moderación.

Artículo basado en información obtenida de: "Chile, Celulosa Arauco 'pide disculpas' y reabre su planta", Víctor L. Bacchetta, correo electrónico: vbacchetta@redcalc.org, http://www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/celulosa_arauco.htm; "Celulosa Celco ahora va por el litoral Lafkenche", Alfredo Seguel, Mapuexpress Informativo Mapuche, <http://www.mapuexpress.net>

● inicio

- Colombia: una ley forestal para negocio de capitales extranjeros

De los 3.500 millones de hectáreas de bosques que existen en el mundo, cerca de 63 millones están en Colombia y la mitad de ellos se localizan en los territorios enriquecidos por las culturas indígenas y de comunidades negras. Estos bosques, albergan a su vez una de las más ricas formas de diversidad biológica del mundo y son el soporte de numerosas culturas que los habitan. Son también lugares de regulación climática e hídrica y el hábitat de complejas e irremplazables formas de vida.

No obstante, y en lo que constituye un lamentable rasgo común a numerosos países del Sur, la biodiversidad, la relación cultura-selva y las condiciones de vida de numerosas comunidades se han visto dramáticamente afectadas por la puesta en marcha de encadenamientos productivos forestales promovidos por la USAID a través del

Programa Colombia Forestal. También han incidido otros factores: el interés del Estado colombiano en convertir la biodiversidad y el resto del patrimonio ambiental de los pueblos indígenas y comunidades negras en mercancía al servicio del capital internacional y especialmente de los Estados Unidos en el TLC; la implementación de megaproyectos de infraestructura vial y portuaria, mineros y de bioprospección; el establecimiento de plantaciones a gran escala de palmicultura sobre territorios y espacios vitales de las comunidades negras e indígenas.

En ese marco de políticas se inscribe el Proyecto de Ley Forestal que se viene debatiendo en el Congreso de la República, ha sido aprobado por el Senado y está en último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Diversas organizaciones sociales colombianas han manifestado críticas al proyecto de ley, básicamente en cuanto a que no logra el propósito de poner orden en el caos que hoy vive el país en el aprovechamiento de los recursos forestales y, por el contrario, puede generar mayor caos jurídico dando lugar a la inaplicación tanto de las disposiciones existentes en la materia como de nuevas.

Denuncian en primer lugar que, en torno a la formulación del Proyecto, no se ha dado participación ni se ha consultado a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas mestizas, como tampoco a otros actores sociales involucrados.

Por otro lado, el Proyecto de Ley Forestal aduce regular el manejo de plantaciones forestales y de bosques, pero las organizaciones sociales declaran que: "Su contenido es ante todo para el fomento en el país de la producción de madera a través de plantaciones, desechando la posibilidad de una ley para bosques naturales. Esta es una política que no tiene una perspectiva ambiental integral, ni contempla tampoco a los bosques como un ecosistema como lo fija la Convención de Biodiversidad puesto que se cambian los organismos que planifican y formulan las políticas del sector y se modifican radicalmente las instituciones correspondientes hasta el punto que buena parte del control queda en manos exclusivas del Ministerio de Agricultura y de agentes particulares".

También se acusa al Proyecto de Ley de facilitar el acceso de las compañías internacionales al negocio forestal creando figuras legales que permitirían el acceso a los bosques nativos de las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia. Ya hay suficientes historias como para saber que eso implicaría muy posiblemente la violación de los derechos de las comunidades autóctonas en la medida que se afecta resguardos indígenas, territorios colectivos de Comunidades Negras y asentamientos campesinos.

Las organizaciones señalan que "el marcado afán en el proceso de discusión y la rápida aprobación de la Ley en el Congreso no se compadece con el inmenso impacto que ella tiene sobre la riqueza forestal del país y sobre los derechos de muchos colombianos. En sentido contrario, es conocida la influencia que han tenido entidades extranjeras y empresas madereras interesadas en la promoción y aprobación del proyecto". "La expedición de esta Ley, a las puertas de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual promueve el mercado de servicios ambientales, hace todavía más expeditos los previsibles resultados catastróficos sobre los que aquí estamos advirtiendo."

Numerosas adhesiones individuales y de organizaciones han avalado la carta pública en la que se exponen los referidos argumentos y a la que es posible acceder en

http://www.censat.org/Biodiversidad_Bosques_PL_Forestal.htm. Quien desee adherir a la misma, puede comunicarse con la organización CENSAT por el correo electrónico bosques@censat.org.

Artículo basado en información enviada por CENSAT: "Declaración sobre el proyecto de Ley Forestal", "Carta abierta al Congreso de la República", http://www.censat.org/Biodiversidad_Bosques_PL_Forestal.htm

● inicio

- Perú: el maderero ilegal, fuente del trabajo forzado en la Amazonía

En la Amazonía peruana, la actividad maderera es altamente selectiva, es decir, de la gran diversidad de especies sólo se utilizan unas pocas, lo que ha llevado a la reducción de las existencias de algunas especies. El consumo de determinadas maderas --como la caoba-- no perdona siquiera zonas de reserva.

El maderero ilegal que se desarrolla en torno a estas zonas recurre a diversas estratagemas, desde los contratos de extracción en las llamadas zonas de amortiguamiento (frangas de unos 15 km. de ancho en promedio bordeando la zona de reserva, que sirve a los extractores pues hacen pasar como proveniente de ellas la madera talada en su interior), hasta los permisos de tránsito para transportar por ríos dentro de la reserva la madera supuestamente extraída fuera de ella. También se suele "blanquear" la madera: la legalizan aserrándola con sierra cinta para borrar las huellas de haber sido aserrada con motosierra, modalidad prohibida porque implica gran desperdicio de madera, y se le preparan papeles como si saliera de zona bajo contrato. Ahora también la "blanquean" en el terreno, con aserraderos portátiles de cinta.

La sonoridad y visibilidad de estas actividades que implican gente en campamentos conocidos y permanentes, chatas que transportan madera y grúas, hacen que esta actividad ilegal sea todo menos clandestina. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ubicada en el triángulo formado por la confluencia de los ríos Maraón y Ucayali, se ha identificado que trabajan un promedio de 20 hombres por campamento, y anualmente funcionan unos 50 de ellos.

Es justamente en este sector del maderero ilegal donde abunda un sistema laboral asociado al no pago, a la remuneración en especies, a la prostitución de mujeres en los campamentos madereros y a condiciones de trabajo infrahumanas.

La esclavitud del siglo XXI se da con el nombre de trabajo forzoso y sus víctimas son los más marginados --niños, mujeres, comunidades nativas. Esos que parecen invisibles. La competitividad obliga a buscar el abaratamiento en los procesos de producción y entonces se dan estas modalidades de explotación que deberían de ofender las conciencias.

Isidoro Chahuán, motosierrista, de la etnia quichua, dice: "Trabajo por un jabón, sal, un cartucho, una camisa". Él es lo que se denomina un trabajador habilitado. En la Amazonía, más de 30 mil peruanos de las comunidades indígenas más alejadas se encuentran en esta situación inhumana. Un informe para la OIT sobre el trabajo forzoso en la extracción de madera en la Amazonía, del antropólogo Eduardo Bedoya y el científico social Alberto Bedoya, habla de hasta tres formas en las que opera. En dos de ellas el sistema de deudas infladas y los magros pagos por la materia extraída son un denominador común. Si bien se trata de un fenómeno histórico, que data de la época colonial, ahora con el 'boom' del cedro y la caoba la industria maderera ha tenido que ir ganando espacios y por eso se ha visto forzada a internarse en territorios vírgenes, zonas de reserva comunal, parques nacionales y espacios donde hay grupos no contactados o de contacto incipientes.

El caso más frecuente es el que se da cuando un "maderero-habilitador" vinculado a grandes empresarios madereros, entrega en la ciudad una cantidad de dinero a "patrones enganchadores" para obtener madera. Estos ofrecen dinero o anticipos de alimentos o bienes (tales como arroz, sal, botas, rifles, motosierras, etc.) al interior de las comunidades indígenas, a condición de que ellos, que conocen la zona y sus árboles mejor que nadie, les entreguen madera cortada. Por lo general estos acuerdos se dan a través de contratos verbales o escritos donde no hay referencia al valor de la madera en el mercado, cosa que desconocen los nativos y son presa fácil del engaño. Así, cuando los trabajadores entregan la madera al "patrón enganchador", éste esgrime distintos motivos por los que el material no es bueno y arbitrariamente reduce el pago. Como no les alcanza el dinero, los indígenas piden más préstamos y así engrosan su deuda. El campesino queda "enganchado" llegando a firmar contratos de hasta diez años.

En el caso de los campamentos madereros se reúnen trabajadores, por lo general ajenos a las comunidades, para que realicen la extracción de la madera. En el referido informe se explica que en las ciudades se les entrega el 10% inicial para reclutarlos y luego se les lleva a trabajar a las zonas más remotas de la Amazonía. Esas regiones son

muy lejanas para escaparse, se les quita los documentos, se les aleja de las canoas y se les amenaza con no pagarles si pretenden fugarse. Los salarios son muy bajos y los bienes muy caros. Una gaseosa en un campamento maderero puede costar 10 soles, un costal de azúcar 50, uno de arroz otro tanto. Así se inicia un círculo vicioso de deudas. "El gran problema de estos campamentos es la incapacidad que tienen los trabajadores de movilizarse. Los inspectores laborales no llegan por lo inaccesible de la zona. Los pobladores tampoco pueden pagar su deuda buscando otro campamento porque reciben, en muchos casos, amenazas físicas", indica Bedoya. Se trata de un trabajo forzado porque hay pérdida de libertad.

En muchos casos aquellos que recalán en un campamento maderero, formado por 10 o 40 trabajadores, llevan a su familia. La esposa cocina, los niños ayudan, pero a ninguno se les remunera. De acuerdo con el estudio hay un alto índice de adolescentes hombres y las mujeres generalmente trabajan de cocineras y prostitutas, cobrando por sus servicios en tablones de madera.

Éste es el castigo de la madera. Para los "patrones-enganchadores", que trabajan para los madereros-habilitadores, que a su vez trabajan para grandes empresas madereras, engañar a los campesinos no le resulta tan difícil. Solo tienen que aprovecharse de la miseria generada por el propio sistema de explotación maderera que les ha depredado sus economías locales, los ha desplazado de sus tierras o los ha cercado, quitándoles los bosques que forman parte de su sustento de alimentos, medicinas, vivienda.

Sobre esas condiciones de miseria prospera el gran negocio forestal, en una convivencia estrecha entre actividades legales e ilegales hasta el punto de formar una sola, y en ocasiones incluso gozando del aval de sellos de certificación.

Artículo basado en información obtenida de: "30 mil peruanos son víctimas de trabajo forzado en la Amazonía", Gabriel Gargurevich, Diario La República mayo de 2005, y "Controles y descontroles: Extracción ilegal de madera en el Pacaya-Samiria", Alberto Chirif, Actualidad indígena N° 99, marzo de 2005, Servicio de Información Indígena SERVINDI, www.servindi.org, enviados por Carlos Arrunátegui, FAdAmazon (Fundación de Adhesión con los Pueblos Amazónicos), correo electrónico: carrunategui@fadamazon.org; "Esclavos de la madera", Jimena Pinilla Cisneros, El Comercio, <http://www.elcomerciooperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2005-05-12/impCronicas0305152.html>

● inicio

AFRICA

- Camerún: el significado de la pobreza para los Bagyeli

A ojos de los forasteros, los Bagyeli pueden parecer muy pobres. Sus posesiones materiales se reducen a prácticamente nada, tienen poco o ningún dinero y además a menudo no cuentan con una casa permanente. No obstante, uno de los indicadores más importantes de la riqueza de estos pueblos es el acceso que tienen al bosque y sus recursos y el grado de su posibilidad de participar en los procesos de adopción de decisiones relativas a su sustento.

El Banco Mundial aprobó en 2000 el Documento de Estrategia para la reducción de la pobreza en Camerún, convirtiendo a este país en candidato para la reducción de la deuda. Sin embargo, Amigos de la Tierra Camerún expresó inquietudes relativas al hecho de que no se escucharon las voces de pueblos indígenas y tribales como los Bagyeli y que en la estrategia no estaban representadas su percepción ni sus aspiraciones en relación con el desarrollo.

Los 'pigmeos' Bagyeli que viven en el parque nacional de Campo Ma'an, en el sudoeste de Camerún, se han mantenido durante siglos gracias a su vasto conocimiento de la flora y la fauna del bosque circundante. Su forma tradicional de supervivencia consistía en la caza, la pesca y la recolección de miel, frutas, ñame silvestre, orugas y caracoles. Cuando salen a cazar se cubren con un polvillo hecho con la corteza del árbol Moabi, que les sirve de

camuflaje. Hasta hace poco eran un pueblo nómada que se refugiaba en chozas temporarias construidas con palos y hojas.

Aunque algunos Bagyeli aún siguen las tradiciones de sus mayores, el madereo intensivo, la agricultura y un oleoducto que atraviesa sus tierras han planteado una amenaza para su forma tradicional de vida, así como para la de otros grupos pigmeos. El acceso restringido al bosque afecta la forma de sustento tradicional de los Bagyeli y lleva a la marginación, la discriminación y el empobrecimiento.

A partir del establecimiento del parque nacional de Campo Ma'an, creado por el gobierno como compensación por el daño ambiental causado por el oleoducto Chad-Camerún, la seguridad alimentaria e incluso la supervivencia misma de los Bagyeli están en peligro debido a las restricciones impuestas a sus actividades de caza. La zona es conocida por su notable biodiversidad: cerca de 390 especies de invertebrados, 249 especies de peces, más de 80 especies de anfibios, 122 especies de reptiles, 302 especies de aves y cerca de 80 especies de mamíferos grandes y medianos, todo lo cual ha sido conservado y manejado en forma sustentable por generaciones de pueblos indígenas y locales.

Desde el año 2003, Amigos de la Tierra Camerún, el Programa por los Pueblos de los Bosques y la Fundación Bosques Tropicales apoyan a los Bagyeli para documentar la utilización que hacen del bosque y sus recursos a través de un proceso llamado "cartografía participativa". La cartografía participativa, muy usada por las comunidades indígenas de Latinoamérica y Asia del Sur, implica que cartógrafos seleccionados por la comunidad recojan información detallada sobre la tierra, sus características y sus recursos. Los resultados ponen de relieve la importancia del bosque y sus recursos para la subsistencia de las poblaciones indígenas de Camerún.

La creación de zonas protegidas en sus territorios ancestrales ha infringido los derechos individuales y colectivos de los Bagyeli, marginándolos y empobreciéndolos. Los Bagyeli creen que cualquier estrategia de reducción de la pobreza propuesta por el gobierno o por financiadores extranjeros debe incluir su participación y basarse en sus derechos colectivos de acceso a la tierra y a los recursos del bosque.

"Si no recoges fruta no puedes tener jabón; si no vas a pescar, no puedes comer sal; si no cultivas plátanos para vender no puedes comprarte ropa. Estoy sucio y no tengo ropa porque no hago nada. Me han prohibido la entrada al bosque" (indígena Bagyeli).

Adaptado de "Nature: Poor people's wealth. The importance of natural resources in poverty eradication", julio de 2005, Amigos de la Tierra Internacional, <http://www.foei.org/publications/pdfs/poverty.pdf>

● inicio

- Madagascar: minas de ilmenita a cambio de bosques y gente

El gigante minero Rio Tinto, la segunda mayor empresa de minería diversificada del mundo, ha recibido permiso para abrir una enorme mina en la isla de Madagascar, en el océano Índico, que implicará excavar uno de los bosques más singulares del mundo en territorios de población indígena.

QIT Madagascar Minerals, subsidiaria de Rio Tinto, con 20% de participación del gobierno y apoyo del Banco Mundial, es quien está elaborando el proyecto de minería de dióxido de titanio de US\$ 775 millones que se pretende llevar a cabo en la región de Fort Dauphin de esta isla.

En diferentes etapas se excavarán hasta 1.000 hectáreas de bosques a lo largo del borde del océano Índico con el fin de extraer ilmenita, el mineral que se utiliza cada vez más para producir el pigmento blanco de dióxido de titanio con el que se da color a pinturas, papel, plásticos y dentífricos, sustituyendo la pintura a base de plomo debido a sus consecuencias sobre la salud. El enorme crecimiento económico de China ha provocado una altísima demanda del pigmento blanco en momentos en que se están agotando otras minas de ilmenita en Australia y Sudáfrica.

La producción comenzará en 2008, luego de que se haya construido un nuevo puerto, financiado en parte con US\$ 35 millones del Banco Mundial. Se espera que la capacidad inicial del proyecto de minería alcance las 750.000 toneladas anuales. La operación completa podría durar 40 años.

Amigos de la Tierra ha estado en contra de estos planes desde el principio e incluso uno de sus principales directores, Andrew Lees, murió hace diez años en el mismo bosque mientras investigaba los controvertidos planes para el establecimiento de una mina. Lees era botánico y sentía una pasión especial por los cursos de agua; estaba investigando los efectos de la mina no solamente sobre la vida silvestre sino también sobre el pueblo malgache, gran parte del cual vive en el bosque.

Madagascar tiene más grupos de animales singulares que cualquier otro lugar del planeta. Hay 24 familias de especies que solamente se encuentran en la isla. El más conocido de los animales de Madagascar es el lemur, un bichito de ojos grandes parecido a un mono, del cual hay 32 especies diferentes. Otros animales bajo presión ecológica son las tortugas Angonoka, las tortugas más raras del mundo de las que hoy sobreviven apenas unos centenares, y las tortugas de cuello ladeado.

Tony Juniper, director de Amigos de la Tierra, está horrorizado de que el proyecto haya recibido luz verde. El día que se enteró de la decisión declaró: "Hoy es un día muy triste con muy malas noticias para el pueblo de Madagascar. Rio Tinto está explotando los recursos naturales en el mundo en desarrollo y, una vez más, quienes pagan el precio son los residentes locales. Esta mina no resolverá los terribles problemas de pobreza de la isla pero sí dañará su preciosa biodiversidad". Añadió que era hora de promulgar leyes internacionales para proteger los intereses de las personas y el medio ambiente. "Cada vez queda más claro que no se puede confiar en las empresas para esto".

Christine Orengo, la compañera de Lees, dijo: "Hay una terrible pobreza en Madagascar, pero ésta no es la mejor forma de reducirla. Miles de extranjeros vendrán a ocupar los puestos de trabajo y preocupa la propagación de enfermedades como el VIH. Me temo que terminará destruyendo una de las regiones más hermosas del mundo".

Frente a las críticas, Rio Tinto ha intentado preservar su imagen y prometió replantar el bosque tropical que tiene que tirar abajo para extraer el ilmenita trabajando en parcelas de 50 hectáreas por vez. Lo que haría sería separar el mineral de la arena y luego volver a colocar la arena y reforestar. ¿Como si pudiera "plantarse" un ecosistema floreciente y biodiverso como el bosque!

Juniper afirmó que ninguna empresa puede garantizar que sus planes funcionarán de la mejor manera posible. "Podemos tener montones de planes para la protección del medio ambiente, respaldados por montones de expertos, pero estamos hablando de una mina que funcionará durante 40 años.

¿Qué vamos a hacer si, cuando termine todo, nos encontramos con especies extinguidas y un hábitat arruinado y gente que sigue empobrecida? ¿Quién se va a hacer responsable de todo esto? Nadie. Es la misma vieja historia de siempre: las multinacionales obtienen exactamente lo que quieren, sin importar el costo ambiental".

Artículo basado en información obtenida de: "Madagascar's unique forest under threat", agosto de 2005, The Observer, Guardian Unlimited, <http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1544101,00.html>; "Rio Tinto Mine Lifts Hopes of Madagascar Progress", Planet Ark, sitio web de Mines & Communities, <http://www.minesandcommunities.org/Action/press704.htm>

● inicio

- Sudáfrica: los monocultivos forestales son un camino a la pobreza

Al igual que otros países invadidos por los monocultivos forestales (o el "cáncer verde", como los llaman algunos sudafricanos), Sudáfrica demuestra que el objetivo de estos planes no fue mejorar la calidad de vida de los residentes locales. Todo lo contrario.

A la información proporcionada por el informe sobre los impactos de la subcontratación en la industria forestal (ver boletín N° 96 del WRM) se sumaron las impresionantes estadísticas que surgieron del primer taller de estatutos de empoderamiento del sector forestal realizado el 12 de setiembre en Londres.

"Nos preocupa mucho el tema de los trabajadores que cobran entre 20 y 22 Rand [US\$ 3-4] por día", dijo Thami Zimu, productora de madera y caña de azúcar de South Coast, en representación de los contratistas.

"Sería bueno que los estatutos de la BBBEE [una estrategia oficial que aspira a desmantelar el racismo de la economía sudafricana] procurasen brindar directrices sobre cómo evitar esto".

Añadió que los bajos salarios de los trabajadores se debían en gran medida a lo poco que los grandes contratistas pagaban a los subcontratistas.

Una persona del público se lamentó de que los principales contratistas del sector forestal no participaran de las audiencias públicas. "Si estuvieran aquí les explicaríamos en detalle las penurias y el abuso que sufrimos como trabajadores de zonas rurales, incluso las mujeres y los jóvenes". La persona que representó al distrito de ORTambo dijo que "a muchas mujeres las cargan en los camiones y las tratan mal, y además les pagan poco".

Se han señalado como causa fundamental de los problemas del sector las relaciones desiguales de poder entre subcontratistas y grandes contratistas, que se relacionan con la elevada tasa de subcontratación estatal, que se calcula asciende al 90% de todas las actividades forestales.

A la herencia de devastación social, económica y ambiental de las viejas estructuras coloniales se suman los monocultivos de árboles, que no han hecho otra cosa que seguir el camino del empobrecimiento, desigualdad, exclusión y degradación del medio ambiente.

Artículo basado en información obtenida de: "South African forestry labourers are paid as little as R20 a day", Zine George, <http://www.dispatch.co.za/2005/09/13/Easterncape/dpay.html> enviado por Phillip Owen, GEASPHERE, correo-e: wac@geasphere.co.za, www.geasphere.co.za

● inicio

- Tanzania: ¿privatización o piratización de nuestros bosques?

La manía privatizadora nos ha atacado como una plaga inevitable. La lista de privatizaciones se expande inexorablemente. Lo admitamos o no y cualquiera sea el lenguaje que utilicemos para racionalizarlo, el hecho es que las instituciones de Bretton Woods y los poderes occidentales dominantes están obligando a los gobiernos africanos a tragarse las privatizaciones. Incluso la llamada reducción de la deuda del Grupo de los 8 (países industrializados) se basa en la privatización, que es una de sus condiciones. Y las instituciones de Bretton Woods tienen una forma particular de discutir.

Los fracasos de la privatización se utilizan como argumentos a favor de una mayor privatización de más recursos, con el pretexto de que "si no se privatiza lo suficiente, no se podrán ver sus beneficios". Y por supuesto que el éxito de la privatización de por sí llama a más privatizaciones. De uno u otro modo el argumento se basta a sí mismo.

La primera teoría fue que las empresas paraestatales que daban pérdidas eran una carga para el contribuyente. La privatización garantizaría que se convirtieran en empresas eficientes que pagaran sus impuestos. Aunque, claro está, las primeras paraestatales que se privatizaron, como las cervecías, no daban pérdidas. Hay que ser un genio para perder en el negocio de la cerveza. Su "rápido éxito" en términos de retornos y recaudación fiscal se usó para justificar otras privatizaciones.

Obviamente ningún inversor privado compraría una empresa que da pérdida. Por lo tanto hay que venderlas a precios ridículos sin obligaciones ni daños. Las obligaciones tiene que asumirlas el Estado, es decir, el mismísimo contribuyente que se suponía sería rescatado de la empresa paraestatal que daba pérdida. Invariablemente una de

las primeras víctimas de la privatización son los trabajadores, que son despedidos por millares. Los nuevos propietarios se niegan a pagar compensaciones por desempleo. Esto lo tendrá que hacer el gobierno, si es que se hace. Por lo tanto el contribuyente asume otra responsabilidad al tiempo que algunos de ellos dejan de contribuir y pasan a sumarse a las colas de desempleados.

Ningún especulador privado querría invertir su capital si no obtuviera ganancias, y no solamente ganancias sino enormes ganancias. Hoy en día África ofrece altos porcentajes de retorno sobre el capital gracias a su riqueza de recursos y sus gobiernos dependientes. Como dijo Mwalimu (Julius Nyerere) una vez, África atrae solamente a misioneros y mercenarios: misioneros para consolar a los pobres y mercenarios para supervisar el saqueo.

Pero lucrar implica ciertas condiciones mínimas. Es el Estado quien asume la carga de crear el entorno que permita al capital obtener sus lucros: construir la infraestructura y suministrar agua, electricidad y telecomunicaciones baratas, controlar a los trabajadores rebeldes, mantener la ley y el orden y poner a disposición varios proveedores de servicios, desde entretenimientos a alimentación, pasando por empresas de seguridad, para atender a la nueva "comunidad de expatriados". Se cree que África tiene hoy más inmigrantes que en la época de la independencia.

Pero luego nuestras empresas paraestatales de agua, electricidad y teléfono no son eficientes. Sus tarifas son altas. Nuestros mercados están por debajo de la norma, nuestra carne no es higiénica y nuestros tomates y cebollas y naranjas no alcanzan el tamaño mínimo. Entonces las instalaciones también tienen que ser desnacionalizadas, a veces directamente mediante la venta y si no gracias a contratos de arrendamiento y gestión. Si hay gente ocupando hay que desalojarla para hacer lugar a supermercados y aldeas de expatriados para que haya carne asada sudafricana y cereales suizos.

Pero tampoco es tan fácil convertir estas instalaciones en negocios lucrativos. Las fábricas y la maquinaria son anticuadas. Sus sistemas de facturación tienen montones de agujeros. Dado que las ganancias o las comisiones dependen del ingreso, habrá que importar medidores de agua y de electricidad más eficientes. Una vez más se llama al Estado para que proporcione la financiación que permita la rehabilitación. Se ve forzado a obtener préstamos del Banco Mundial y de cualquier otro para ayudar al inversor a importar la maquinaria necesaria. Por supuesto, la deuda y sus intereses se pagan con dinero del contribuyente, tanto el de hoy como el que todavía no nació. Mientras la deuda pública aumenta, las ganancias privadas se disparan; todo en nombre del desarrollo.

La actividad lucrativa de las empresas tiene que buscar nuevos terrenos constantemente. De fabricar productos a convertir bienes públicos en productos, el capital empresarial se mueve de la fabricación a los servicios públicos, la educación y la salud, el agua y la energía, y de mercantilizar la tierra a privatizar los bosques.

La privatización y comercialización de los productos del bosque es la nueva tendencia. Un artículo reciente publicado en periódicos de Tanzania informa sobre el acuerdo para arrendar la plantación de teca de Longuza a la empresa Kilombero Valley Teak Company (KVTC) y esto no es más que la punta del iceberg. Los bosques se han vuelto importantes para el capital empresarial a causa no solamente de los recursos madereros sino también de los recursos biológicos. Por esto mismo, las consecuencias de entregar los bosques al capital empresarial va mucho más allá de la deforestación, pues el capital los convertirá en productores de materias primas para sus laboratorios de ingeniería genética.

La privatización de los bosques y los productos del bosque ha generado gran resistencia en Asia y Latinoamérica e incluso en algunos países desarrollados, entre ellos Canadá y Estados Unidos. Las consecuencias y los efectos de la privatización de los bosques son de largo alcance y se han debatido y discutido en otros países.

Tenemos que aprender de la experiencia de los demás y reevaluar la nuestra. Que el incidente de Longuza abra un amplio debate sobre el tema de la privatización en general y, más en particular, lo que implica la privatización, sea de la forma que fuere, de uno de nuestros principales recursos y patrimonio, nuestros bosques.

No entreguemos nuestro sustento del futuro a los piratas de las corporaciones.

Por Issa Shivji, Pambazuka News, <http://www.pambazuka.org/index.php?id=29614>

● inicio

ASIA

- India: los Adivasi y el manejo de los bosques

Los bosques de la India, cimientos de la seguridad ecológica de la nación, están desapareciendo a un ritmo alarmante a manos de una serie de empresas comerciales. Las últimas estadísticas publicadas por la Encuesta Forestal de la India demuestran que el país ha perdido más de 26.000 km² de sus densos bosques durante el período 2001-2003. Más de 3.000 especies de plantas con flores y cerca de 200 especies de animales del país ya fueron clasificadas como amenazadas; es seguro que esta pérdida masiva de bosques colaboró con el proceso que está diezmando la biodiversidad.

Esto ocurre en momentos en que el mundo entero, salvo EEUU, cuenta los días que faltan para el año 2010, para cuando deberían lograrse reducciones sustanciales de la pérdida de la biodiversidad mundial a través de la instrumentación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), del que la India es parte. El rotundo fracaso de la India en el manejo sustentable de sus bosques se funda en gran medida en la naturaleza excluyente y jerárquica del régimen de administración forestal, modelado por el legado colonial e instruido por la visión del sistema de castas, que mira con desprecio a los que están en la base de la pirámide social.

En la raíz de la crisis de los bosques que se profundiza está el desplazamiento de los Adivasi, los indígenas del país, de su función tradicional de cuidadores de los bosques de la India. Los Adivasi, los guardianes originales de nuestros bosques, que los han defendido de los salvajes asaltos de los colonialistas británicos y que han luchado contra una multitud de explotaciones comerciales a lo largo del orden político poscolonial, han sido sistemáticamente inhabilitados y apartados del manejo de los bosques por el régimen conservacionista, incluidas las leyes sobre vida silvestre y bosques. El proyecto de ley sobre Tribus Registradas (Reconocimiento de los derechos sobre los bosques) que se propone, por lo tanto, no solamente es un medio de deshacer la injusticia histórica contra los Adivasi, como la introducción del anteproyecto de ley declara con razón, sino que también brinda la muy necesaria oportunidad de recuperar la mayor población indígena del mundo como custodios de nuestros bosques.

No sorprende que haya quienes atacaron este proyecto de ley, que en cierto modo señala un cambio de paradigma. La doctrina que se opone a la construcción de una asociación con los Adivasi en lo que refiere al manejo de los bosques sitúa a la población autóctona y al resto de los sectores marginados como "el Otro" y no puede aceptar ni siquiera un ascenso infinitesimal de la categoría de los subalternos. La conservación no es más que una coartada de esta doctrina. Porque el mundo ya ha dejado de lado el dogma excluyente de la conservación característico del enfoque que importamos de Occidente.

El CDB, que es jurídicamente vinculante, se basa en el triple objetivo de la conservación, el uso sustentable y la distribución equitativa de los beneficios y estipula la participación de los indígenas en la gestión de la biodiversidad. Uno de los tres grupos de trabajo continuos establecidos por el proceso del Convenio debe tratar los asuntos relacionados con el uso y protección del conocimiento tradicional de los indígenas. Sin embargo, la India se ha burlado del CDB con la creación de una ley nacional, la Ley sobre Diversidad Biológica, que se limita a tratar los asuntos relativos a la reglamentación del acceso a la biodiversidad, fingiendo una dichosa ignorancia de la existencia de los indígenas (de una forma que recuerda la derrota del espíritu del innovativo Programa Hombre y Biosfera a través de la simple reclasificación de algunas zonas protegidas existentes sin reformar el sistema de administración).

De todos los programas que componen el Programa 21 adoptado en 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), los cuatro que tratan de la administración de recursos para la vida terrestre subrayan el papel de los indígenas y además incluyen un programa temático específico para fortalecer el papel de los indígenas en el manejo sustentable de tales recursos. Además, el plan de instrumentación de la Cumbre de Johannesburgo, realizada diez años después de la CNUMAD, exhorta a dar a los indígenas la

posibilidad de contribuir a la aplicación de los objetivos del CDB y reconoce en forma explícita su papel en la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.

El Congreso Mundial de Parques, en particular en su sesión de 1962, fue quien en gran medida instrumentó en el mundo en desarrollo que se impulsara la doctrina de zonas protegidas de modo violento y excluyente, siguiendo el ejemplo del Parque Nacional de Yellowstone en EEUU, cuyo establecimiento implicó la muerte de más de 300 indígenas norteamericanos y el desplazamiento de otros varios miles. Dando vuelta la pisa, la sesión de 2003 del Congreso subrayó la importancia de las formas participativas y colaborativas de manejo de las zonas protegidas y exhortó específicamente a la restitución de las tierras tradicionales usurpadas a las comunidades indígenas, que es lo que este proyecto de ley intenta lograr. En los últimos años la cantidad de zonas protegidas en todo el mundo ha aumentado marcadamente y sobrepasa los 100.000 sitios y cubre más del 10% de la superficie terrestre del planeta. Cabe señalar que gran cantidad de las zonas protegidas de creación reciente son realmente reservas de recursos usados en forma sustentable.

Al dirigirse a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, donde por primera vez se incluyó al medio ambiente en la agenda política mundial, la difunta primera ministra Indira Gandhi dijo a Occidente que la pobreza era la peor forma de contaminación, declaración que luego se hizo famosa gracias a nuestros burócratas conservacionistas a lo largo de sucesivos foros multilaterales. Sin embargo ella misma contribuyó, pocos meses después de su regreso de la Conferencia de Estocolmo, a profundizar la pobreza y la miseria de una enorme cantidad de indios, irónicamente en nombre de la conservación, a través de la Ley de Protección de la Vida Silvestre. Esta ley puso en peligro la existencia misma de los Adivasi, cuya vida está vinculada orgánicamente con la vida silvestre, como si no hubiera bastado con la ilegítima Ley de Bosques de la India de 1927, que formalizó la apropiación colonial de los bosques indios. La trágica desaparición de los tigres de Sariska, a pesar de que en los últimos 25 años se gastaron diez millones de rupias (US\$ 232.500) por cada uno de los tigres, como reveló el órgano encargado de su conservación (Tiger Task Force), es muy educativa en cuanto al fracaso del proyecto de conservación regimentado.

No hay motivos para que la India siga prolongando las crisis gemelas que son la aceleración de la degradación de la biodiversidad y el peligro al que se expone a la población Adivasi incluso después de más de medio siglo de independencia formal. La entrada en vigor del proyecto de ley sobre los derechos de los Adivasi al bosque debe verse como el primer paso esencial en la reforma del régimen de manejo de bosques del país para procurar la colaboración de los conservacionistas más originales para la protección y el uso sustentable del patrimonio ecológico más crítico del país.

Por S. Faizi, correo-e: ecology@zajil.net

● inicio

- Indonesia: un parque nacional, su fracaso y su impacto sobre el sustento de la gente

La zona de bosques de Monte Merapi fue clasificada como parque nacional; en la región, cuando se habla de esto, a menudo la gente termina preguntándose directamente por qué esta zona fue convertida en parque.

El ecosistema de bosques de Monte Merapi se sitúa entre los 600 y los 2.968 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Yogyakarta, República de Indonesia. Tiene una superficie de 8.655 hectáreas cubiertas en su mayoría por la selva tropical de montaña que es fuente de sustento de un millón de personas distribuidas en cuatro distritos.

Las aguas superficiales que vienen de Monte Merapi se dividen en tres direcciones: la cuenca de Progo al oeste, la de Opak en el medio y Bengawan Solo al este. Estas cuencas han abastecido agua para el consumo, el riego y la industria de más de cinco millones de personas de las provincias de Jogjakarta y Java Central.

El manejo insustentable de Monte Merapi amenaza su existencia misma. La privatización del agua, ahora en manos de una empresa privada, impide que alrededor de mil agricultores puedan cultivar sus tierras. La explotación de las minas de arena produce 3,5 millones de metros cúbicos por año, las fuentes y pozos de agua se han degradado

rápidamente y se está destruyendo la flora y la fauna.

Pero el paradigma del gobierno sigue siendo el mismo: la explotación de los recursos a cambio de dinero en efectivo sin ninguna consideración sobre el uso a largo plazo. La economía se coloca por encima del ambiente y la sustentabilidad.

Muchas personas del lugar expresaron su oposición al plan gubernamental de convertir esta zona en el Parque Nacional de Monte Merapi cuando se inició este proceso en el año 2001. Haciendo caso omiso a la oposición, el 4 de mayo de 2004 el Ministerio de Bosques de Indonesia emitió un decreto que convirtió oficialmente al bosque en una zona protegida.

Quienes nos oponemos a la medida denunciarnos que el decreto ministerial viola tanto principios legales como principios de transparencia, democracia y derechos humanos y que se trata de una expresión de la arrogancia del gobierno.

El decreto se opone a un decreto anterior del mismo ministerio que establece el debido procedimiento previo a la delimitación y el registro de un parque nacional. La decisión contraviene también la Ley N° 22/1999 sobre autonomía regional porque ignora la autoridad de los gobiernos regionales y consejos legislativos de la zona.

El concepto de parque nacional surgió en los países occidentales y fue muy influido por los conceptos clásicos de conservación: una región muy protegida que a nadie se permite tocar. Más tarde evolucionó en un modelo de conservación ecofascista cuya prioridad era la "naturaleza" no perturbada incluso si para eso había que deshacerse de los habitantes del lugar.

El primer parque nacional del mundo se estableció en EEUU en 1872 con la delimitación y registro del Parque Nacional de Yellowstone. La administración del parque no permitió que nadie hiciera uso de los recursos naturales del mismo, haciendo caso omiso al hecho de que allí vivían tribus indígenas. Fue imposible evitar los conflictos, que llevaron a la expulsión forzada de las comunidades indígenas de la región.

Desgraciadamente muchos países, entre los que se cuenta Indonesia, se inspiraron en ese modelo. En 1980 el gobierno de Indonesia estableció los primeros cinco parques nacionales.

El gobierno aplicó el concepto sin considerar su adecuación a las condiciones sociales y económicas del país, prefiriendo al parecer agradar a los países occidentales más que a su propio pueblo. Esto queda demostrado con el hecho de que se han establecido 42 parques nacionales a lo largo y a lo ancho del país, uno tras otro, sin estudios suficientes sobre la forma en que se han manejado los parques existentes.

En muchas de las regiones llamadas parques nacionales las condiciones han empeorado a partir de que se las convirtiera en tales. En lugar de preservar la zona y generar beneficios, el establecimiento de parques nacionales a menudo ha provocado daños y desventajas. Los parques nacionales de Monte Leuser, Monte Halimun, Kutai, Bukit Tiga Puluh, Tanjung Puting, Monte Palung, Ujung Kulon, Lore Lindu, Rawa Aopa, Komodo, Lorentz y Wasur son ejemplos de cómo este modelo de conservación lleva a problemas sociales y económicos y a la degradación del medio ambiente más que su preservación.

En Indonesia la aplicación del concepto de parque nacional no es solamente teórica sino que ocurre también en las esferas de las políticas y de la administración. En cuanto a las políticas, por ejemplo, a través del organismo de administración de los parques nacionales (National Park Management Body) el gobierno discrimina los derechos del organismo de administración de los derechos de la gente, que se considera subordinado al organismo de administración. Tienen que obedecer al organismo sin chistar mientras éste aplica reglamentaciones fascistas que fueron creadas para servir a los intereses del gobierno. La Ley N° 5/1990 relativa a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, que no menciona la función ni los derechos de las personas en cuanto a los recursos naturales, es un ejemplo de esta arrogancia.

El organismo de administración no es imparcial pero además, al igual que otras organizaciones del Estado, sufre de corrupción. En tanto administrador de los parques nacionales, el organismo de administración goza de autoridad casi total. No hay espacio para los derechos de las comunidades circundantes. Que la administración de parques nacionales cae a menudo en la corrupción es un hecho demostrado por su cooperación con militares e intereses comerciales en actividades de deforestación ilegal, bien conocidas desde hace mucho tiempo. El madereo ilegal masivo que ocurre en casi todos los parques nacionales fuera de Java, incluidos los parques nacionales de Tanjung Puting y Monte Palung, involucra a jefes del organismo de administración, empresarios y militares.

Esta cooperación lleva también al robo masivo de recursos biológicos, la expulsión de los pobladores indígenas y la apertura de nuevas minas dentro de los supuestos "parques nacionales".

En Indonesia los parques naturales no significan conservación: significan más perjuicios a la naturaleza y el empobrecimiento de las comunidades locales.

Deberíamos preguntarnos por qué el gobierno estableció el parque nacional de Mount Merapi sin haber realizado estudios previos amplios y participativos. En mi opinión, los mismos problemas que ocurrieron en otras zonas volverán a ocurrir en Merapi. ¿Por qué? Porque la comunidad local y el ecosistema del Merapi son inseparables e interdependientes.

Durante cientos o tal vez miles de años, las comunidades circundantes han protegido Merapi con sabiduría porque garantiza su sustento mediante su agua limpia y sus verdes árboles y porque brinda alimento, refugio y medicinas.

El establecimiento del parque nacional de Monte Merapi ¿podrá resolver los problemas causados por la explotación arenosa en la ladera del Merapi que a su vez ha dañado su bosque y secado sus fuentes? ¿Se preocupará la administración del Parque Nacional de la suerte de las comunidades expulsadas tras la llegada de los nuevos "inversores"? Realmente pienso que no. El sistema de parques nacionales nunca será capaz de resolver estos problemas; en su lugar, creará problemas nuevos que arruinarán aún más este hermoso lugar.

Los problemas de Merapi no pueden resolverse declarando la zona parque nacional. La única forma de solucionar los problemas de la zona es dando verdadero poder a la comunidad local e integrando la administración de la zona de Merapi para que abarque a todos los interesados a través de los principios de cooperación, confianza, participación y conservación.

Lo que la zona necesita es un modelo de conservación fundado en las personas, no un concepto de parque nacional que lo único que ha demostrado ser es un fracaso permanente.

No dejaremos que Merapi termine engrosando la extensa lista de desastres de los parques nacionales de Indonesia y también de muchos lugares del mundo ¿no es así?

Por Mimin Dwi Hartono, Wana Mandhira-Institute for Advocacy and Environment Conservation, correo-e: kaliurang@indo.net.id, wamatour@yahoo.com

● inicio

- Laos: ¿ayuda o incitación? El desplazamiento interno y las agencias de ayuda internacional

La sociedad de Laos vive actualmente un proceso de profunda reestructuración. A lo largo de la última década el gobierno de Laos ha desplazado a decenas de miles de Pueblos Indígenas de sus remotos hogares en las montañas para reasentarlos en zonas bajas y cercanas a las carreteras. Mientras que los objetivos de los programas gubernamentales son el "desarrollo" y la "reducción de la pobreza", los impactos que sufren las comunidades reasentadas en cuanto al sustento, la seguridad alimentaria y el medio ambiente de han sido a menudo devastadores.

“Decenas de miles de personas vulnerables de las minorías étnicas indígenas han sufrido y muerto debido a los impactos asociados a las iniciativas de reasentamiento interno mal concebidas y mal instrumentadas en Laos a lo largo de los últimos diez años”, escriben Ian Baird y Bruce Shoemaker en un informe reciente sobre el reasentamiento en Laos.

El informe, que lleva por título "Aiding or Abetting? Internal Resettlement and International Aid Agencies in the Lao PDR" [¿Ayuda o incitación? El reasentamiento interno y las agencias de ayuda internacional en la República Democrática Popular de Laos], es una crítica a la respuesta de muchas agencias internacionales de ayuda a los problemas provocados por el reasentamiento.

Baird y Shoemaker, quienes han trabajado en Laos durante muchos años, se preguntan si algunos organismos de ayuda no están en efecto “facilitando las violaciones de los derechos básicos de las comunidades afectadas a través de su apoyo al reasentamiento interno”.

Los problemas provocados por el reasentamiento interno en Laos están bien documentados. En 1997 el antropólogo francés Yves Goudineau encabezó un equipo de investigadores que documentó tasas de mortalidad de hasta un 30% en las comunidades de montaña que habían sido reasentadas. El informe fue publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el año 2000 el Banco Asiático para el Desarrollo patrocinó una Evaluación Participativa de la Pobreza dirigida por el antropólogo James Chamberlain. Esta evaluación reveló que muchos aldeanos creen que su pobreza es de creación reciente y debida en gran parte a los programas gubernamentales que implican el reasentamiento. El informe declara que al reducir la agricultura itinerante el gobierno de Laos no ha reducido la pobreza sino que en realidad la ha aumentado.

Baird y Shoemaker enumeran otros 18 estudios realizados por ONGs, organismos de la ONU y académicos que confirman los impactos sobre las comunidades reasentadas de Laos. “Que sepamos, no hay un solo estudio que informe que el reasentamiento ha beneficiado a las comunidades étnicas indígenas de Laos”, escriben.

Algunas organizaciones como la Agencia Sueca para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Concern Worldwide y Canada Fund, resisten activamente los nuevos reasentamientos en Laos trabajando, por ejemplo, en aldeas remotas de montañas y demostrando así que hay alternativas al reasentamiento.

Otros, sin embargo, están promoviendo activamente el reasentamiento. Finn Reske-Nielsen, representante residente del PNUD en Laos, parece no darse cuenta de las pruebas que aparecen en informes publicados por su propia organización en relación con los impactos sobre las comunidades reasentadas. Su argumento es que “el reasentamiento voluntario tiene sentido en un país tan poco poblado como Laos, donde resulta difícil acercar a las personas la educación, la salud y otros servicios esenciales”.

Baird y Shoemaker señalan que el reasentamiento en Laos no tiene nada de inevitable: “Se está imponiendo a las comunidades mediante una combinación de políticas y acciones específicas en lo político, lo social y lo ambiental”. Algunas agencias de ayuda como ADB exigen que el reasentamiento logre sus objetivos a largo plazo. “La integración regional, la promoción de la forestación industrial y los cultivos comerciales y la apertura de mercados exigen el tipo de cambios demográficos en el Laos rural que el reasentamiento interno está ayudando a concretar”, afirman Baird y Shoemaker.

En 2004 Sandro Cerrato, el jefe de la misión de la Unión Europea en Vientiane, elaboró un documento conceptual que exhortaba a un nuevo diálogo sobre reasentamiento entre los grandes organismos de ayuda y el gobierno de Laos. Cerrato propone que las agencias de ayuda apoyen el reasentamiento para poder hacerlo mejor.

Baird y Shoemaker señalan que algunas organizaciones han criticado el documento conceptual de Cerrato por fundarse en una serie de falsas premisas. Cerrato supone que el reasentamiento disminuirá la pobreza. De hecho, según los autores el reasentamiento ha “contribuido a la pobreza a largo plazo así como a la degradación del medio

ambiente en las zonas de montaña y en las tierras bajas, la alienación cultural y el aumento de los conflictos sociales”.

Cerrato supone que las agencias de ayuda pueden distinguir entre reasentamiento voluntario e involuntario. Pero en el contexto de Laos es difícil notar la diferencia, alegan Baird y Shoemaker: “prácticamente todo lo que se clasifica como reasentamiento voluntario en Laos, en realidad, no surge como una iniciativa de las aldeas”.

Cerrato supone que el reasentamiento es inevitable y que las agencias de ayuda no pueden proponer alternativas. Supone que más dinero y una mejor instrumentación mejorarían de algún modo el reasentamiento, aunque no hay pruebas que lo respalden. Ignora el hecho de que las comunidades de las montañas tienen derecho a decidir su propio futuro y supone que no son capaces de hacerlo.

Los organismos de ayuda internacional operan en Laos sin mucha necesidad de rendir cuentas públicamente. No se enfrentan al examen de los medios de comunicación controlados por el Estado. Las agencias internacionales de ayuda rara vez tienen que justificar sus políticas o acciones ante las comunidades o instituciones locales. No necesitan preocuparse por grupos locales de observación o “guardianes” ni por la posibilidad de demandas legales cuando sus acciones terminan perjudicando a las comunidades locales

Aunque Cerrato parece ignorar la gran cantidad de investigaciones sobre los impactos del reasentamiento en Laos, es inaceptable que la UE alegue que no es consciente de las consecuencias potenciales de apoyar nuevos reasentamientos en este país. Baird y Shoemaker señalan que todavía no queda claro el modo en que se desarrollará la iniciativa de la UE. Pero si ésta sigue adelante con la estructura actual, la UE podría percibirse como cómplice activo en la violación de los derechos humanos de las comunidades étnicas de las zonas de montaña de Laos.

“Aiding or Abetting? Internal Resettlement and International Aid Agencies in the Lao PDR”, de Ian Baird y Bruce Shoemaker, fue publicado por Probe International y está disponible en:
<http://www.probeinternational.org/pi/documents/mekong/AidingOrAbetting.pdf>.

Por Chris Lang, correo-e: chrislang@t-online.de

● inicio

- Tailandia: el proyecto de “Ley de bosques comunitarios” amenaza con desalojar a las comunidades rurales que habitan zonas de conservación de bosques

El proyecto de Ley de bosques comunitarios de Tailandia, que pretendía ser un marco formal para definir los derechos de las comunidades a co-administrar las zonas de bosques, ha dado un giro irónico y ahora amenaza con desalojar a las comunidades rurales, en especial los pueblos étnicos que viven en las montañas y las zonas de conservación de bosques.

El 15 de setiembre de 2005, un comité conjunto de ambas cámaras parlamentarias encargado de estudiar el proyecto de ley decidió la prohibición de los bosques comunitarios en las “zonas de bosques primarios”. El comité votó a favor de la propuesta presentada por el ministro de Medio Ambiente, Yongyuth Tiypairat, de establecer “zonas especiales de bosques” en las que se prohíben las actividades humanas, incluidos los bosques comunitarios.

La decisión del comité significa que una vez que el proyecto sea ley todos los asentamientos humanos en esas zonas de bosques deberán ser desalojados. Según Yongyuth, una zona especial de bosques es aquella cuya pendiente es mayor de 30°, tiene gran diversidad biológica y está situada en zona de montaña.

Hay cerca de 2,8 millones de hectáreas de ese tipo de bosques en todo el país, la mayoría situados en zonas de conservación de bosques entre las que se cuentan parques nacionales, refugios de vida silvestre, cuencas

clasificadas y zonas donde la caza está prohibida. Aunque no existen cifras claras, se cree que en estas zonas, distribuidas en todo el país, viven y se sustentan un millón de familias, incluidas comunidades étnicas.

Más de diez años de borradores y negociaciones entre el gobierno, grupos de comunidades locales y organizaciones no gubernamentales (ONG) desembocaron en el proyecto de ley de bosques comunitarios, que significaría que por primera vez se reconoce en la legislación tailandesa la situación legal de las comunidades que viven en y cerca de las Reservas Forestales Nacionales de Tailandia para que utilicen, manejen y protejan sus bosques en cooperación con el Real Departamento Forestal (RFD por su sigla en inglés).

El proyecto de ley de bosques comunitarios es también uno de los primeros en utilizar un mecanismo constitucional que permite a las personas del lugar proponer legislación, para lo que se necesita el respaldo de 50.000 firmas. Con la ayuda de habitantes de todo el país se recogieron 52.698 firmas y a principios de 2000 se presentó al Parlamento dicho proyecto.

La cámara baja del Parlamento aprobó el proyecto, pero luego la cámara alta (el Senado) lo rechazó y propuso modificaciones. Por consiguiente, éste pasó a estudio de un comité conjunto con integrantes de ambas cámaras.

Permsak Makarabhirom es un académico de la Universidad de Kasetsart dedicado a los bosques. También integró otro comité que analizó el proyecto de ley y declaró que la propuesta de "zona especial de bosques" del comité parlamentario conjunto revierte la intención original del proyecto al excluir a las comunidades que viven en las zonas de bosques protegidos y viola los derechos de las comunidades que dependen de los bosques.

Makarabhirom dijo que el proyecto "contradice el espíritu de la Constitución de Tailandia, cuyo artículo 46 defiende los derechos de la población local al manejo de los recursos naturales".

Hay más de 8.000 "bosques comunitarios" en todo el país, utilizados, protegidos y manejados por comunidades locales, en algunos casos a lo largo de varias generaciones. Se pretendía que el proyecto de ley legalizara estas zonas de bosques comunitarios y otorgara reconocimiento legal a los esfuerzos de los residentes locales por conservar los bosques.

Sin embargo, el Real Departamento de Bosques y algunos grupos conservacionistas se han opuesto sistemáticamente a la propuesta del proyecto de ley de establecer bosques comunitarios dentro de las zonas de bosques protegidos. En su prisa por convertir bosques de reserva en zonas protegidas, el Real Departamento Forestal demarcó muchas zonas ocupadas y utilizadas por personas del lugar y las declaró parques nacionales y refugios de vida silvestre. La situación resultante es que la mayoría de las zonas protegidas de Tailandia están rodeadas o parcialmente ocupadas por una población local alienada que siente que le han arrebatado sus legítimos derechos de propiedad.

El Real Departamento Forestal prefiere desalojar a las personas que viven en los bosques o imponerles severas restricciones en cuanto a su uso. No obstante, hasta ahora el enfoque del Departamento no ha logrado impedir la continua deforestación de los restantes bosques de Tailandia causada por el maderero ilegal generalizado, que involucra poderosos intereses comerciales; tampoco ha logrado brindar apoyo al sustento de las comunidades rurales.

Además, los anteriores intentos del Estado de reasentamiento forzado de las comunidades que viven en los bosques más que nada han aumentado el empobrecimiento de las comunidades locales, empeorado los conflictos rurales y provocado mayores pérdidas de bosques, pues las personas desplazadas talan otros bosques de otros lugares.

Varias comunidades aldeanas encuentran su sustento en la agricultura combinada con otras actividades entre las que se incluyen trabajos zafrales en zonas urbanas. La potencial generación de ingresos de los bosques comunitarios es aceptada hoy ampliamente, en particular para las familias más pobres económicamente -cuyos

ingresos están limitados por sus pequeñas parcelas, el bajo nivel de educación o la edad avanzada-, que pueden acceder a los productos no madereros del bosque.

Decho Chaiyapap, coordinador de los Bosques Comunitarios del Norte de Tailandia, una coalición de ONG y agricultores de esa zona, con sede en Chiang Mai, afirmó que los aldeanos no estaban de acuerdo con la resolución del comité conjunto puesto que restringe tanto su acceso a los bosques como su posibilidad de practicar la agricultura en esas zonas. "No queda claro quién ni cómo definirá específicamente las 'zonas especiales de bosques'. Por lo tanto no podemos decir con certeza cuántas familias se verán afectadas", dijo.

Cabe también preguntarse si el comité conjunto tenía mandato legal para modificar un proyecto de ley que ya había sido aprobado por la cámara baja del Parlamento. La solicitada enviada por grupos de la sociedad civil al primer ministro Thaksin Shinawatra declara que "Las modificaciones del comité conjunto violan el anteproyecto de ley de bosques comunitarios aprobado en el Parlamento, que permite el establecimiento de bosques comunitarios en zonas de bosques protegidos". La carta afirma también que la propuesta del comité sobre zonas especiales de bosques constituye una violación del espíritu del anteproyecto de ley de "apoyar la administración local de las zonas de bosques tanto dentro como fuera las áreas de conservación de bosques, puesto que la administración de los bosques a cargo exclusivo del Estado no solamente ha demostrado ser ineficaz sino que también ha agudizado la destrucción de los bosques de Tailandia".

Por Noel Rajesh, Universidad de Chiang Mai, Unidad de investigación social y ambiental (USER), correo-e: rajesh@sea-user.org

● inicio

OCEANIA

- Australia: Nippon Paper en el sudeste de Australia

El mayor fabricante de papel de Japón, Nippon Paper (NP), tiene fama de estar a la cabeza de la reforma ambiental de la industria, pero ¿qué hay de cierto en esto?

South East Fibre Exports es una subsidiaria de NP situada en Eden, unos 500 kms. al sur de Sydney.

Se trata de la planta de astillado más antigua de Australia y la primera operación en el extranjero de la ex Daishowa Paper Manufacturing Company (adquirida por Nippon Paper hace un par de años).

Luego de más de 30 años de astillado destructivo en el sudeste de Australia, cuando Nippon pasó a encargarse de la planta hubo mucha expectativa entre los defensores de los bosques. Después de todo, la reputación del nuevo dueño era mucho mejor que la del dueño anterior.

Hasta el momento, sin embargo, Eden ha resistido a toda la serie de reformas ambientales emprendidas por el nuevo dueño.

Todo parece indicar que también resistirá la próxima, y sin embargo Nippon mantiene su reputación de líder ambiental en la industria japonesa del papel. Puede que ya sea hora de reconsiderar este asunto.

La política ambiental de Nippon Paper suena muy bien en el papel. Se ha comprometido a lograr que para 2008 el 100% de sus astillas provenga o bien de plantaciones o bien de bosques certificados. ¿Quién podría estar en contra?

El único problema es que parecería que Nippon admite algunas de las formas de certificación de peor reputación, reconocidas solamente por la industria.

Ningún bosque nativo australiano está certificado por el Consejo de Manejo Forestal (FSC) y el movimiento conservacionista no apoya esto.

La certificación que procuran la mayoría de los gobiernos estatales y las empresas madereras es la Norma Forestal Australiana (*Australian Forestry Standard*), que para los madereros significaría que todo siga igual.

Las astillas de Eden son de bajo grado y mala calidad y se venden más baratas que las de Tasmania. Siguen encontrando mercado debido a su bajo precio. Se producen a partir de árboles talados exclusivamente para el astillado. Más del 95% de la madera que se tala en la región de Eden termina en astillas, no se trata de un subproducto del aserrado. De hecho, al igual que muchas plantas de astillado, Eden solamente puede procesar troncos enteros.

Actualmente Eden exporta cerca de 860.000 toneladas de astillado verde por año, la mayoría hacia las fábricas de celulosa de su empresa madre en Japón.

Ningún bosque estatal en un radio de 250 kms. en torno a Eden estará a salvo mientras la empresa siga operando.

A pesar de ello, la industria y el gobierno sostienen que esta planta de aserrado utiliza los extremos cortados de los troncos y tras años de costosa propaganda muchos votantes, en especial los residentes urbanos, se inclinan a creerles. Quieren creerles. La alternativa es demasiado incómoda.

Hace poco Nippon Paper inició un programa de consulta pública por Internet solicitando la opinión de la gente sobre su política de suministro de astillas.

Una vez más, un gesto admirable. ¿O no?

La campaña en la que participo, Chipstop ("basta de astillas"), se formó en 1998 y desde entonces ha intentado acercarse a Nippon Paper varias veces. Hemos escrito cartas, solicitadas y mensajes electrónicos y hemos solicitado reuniones. Escribimos cartas en japonés y yo visité Japón con la esperanza de reunirme con representantes de la empresa.

Una vez enviamos una importante carta firmada por más de 50 parlamentarios de Australia, grupos ambientales nacionales, estatales y regionales e individuos destacados. Ni uno solo de estos mensajes recibió respuesta, de modo que debemos preguntarnos cuán auténtico ha sido este reciente ejercicio de "consulta".

Al igual que en muchos procesos gubernamentales y empresariales, probablemente en éste todos los aportes sobre conservación terminen en simple "maquillaje verde", ayudando a legitimar un resultado preestablecido gracias a que se aparenta un compromiso con la conservación.

Lo peor de la destrucción de los bosques nativos del sudeste australiano a cargo de Nippon Paper es que es completamente innecesaria.

Australia dispone de suficiente madera dura producida en plantaciones que ya existen como para sustituir todas sus exportaciones de astillas. Sin plantar un solo árbol nuevo podríamos evitar que los bosques nativos sigan convirtiéndose en astillas. El factor que lo impide es el precio. Los fabricantes de papel prefieren la fibra de mejor calidad de las plantaciones, pero comprarán madera del bosque nativo si es más barata.

Los organismos forestales del gobierno estatal suministran troncos a los astilladores a precios muy bajos, con lo que continúa el madereo del bosque nativo.

El mismo Nippon Paper posee plantaciones considerables en Australia, que no está utilizando. En su lugar, prefiere comprar astillas del bosque nativo.

Chipstop trabaja junto a otras campañas contra el astillado para Nippon Paper y sabemos que en otros países existen inquietudes similares.

Los esfuerzos de nuestra campaña seguirán centrándose en el cierre de la planta de astillado de Eden. Exhortamos a la empresa a aplicar sus políticas en serio y aceptar solamente formas de certificación reconocidas. Queremos también que aplique sus propias normas ambientales a sus propias subsidiarias en otros países y a sus socios comerciales, en especial en países como China e Indonesia.

Por Harriett Swift, correo-e: fuscipes@dodo.com.au, Chipstop Campaign, <http://www.chipstop.forests.org.au>

● inicio

FSC: REVISION DE CERTIFICACION DE PLANTACIONES

- Se solicita al FSC moratoria a la certificación de plantaciones

Como ya hemos informado, el Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés) ha comenzado un proceso de revisión de certificación de plantaciones. (Ver Boletín 92 del WRM).

Varias organizaciones, entre ellas el WRM, que desde hace largo tiempo vienen solicitando que el FSC haga una revisión de la certificación de plantaciones, han aportado a este proceso documentación y estudios sobre los graves impactos sociales y ambientales de las plantaciones de monocultivos forestales a gran escala llevados a cabo en diferentes países.

En la reunión que dio inicio al proceso, el WRM manifestó que el FSC "debería suspender nuevas certificaciones de plantaciones industriales de árboles en gran escala hasta finalizar la revisión". Se considera imprescindible que mientras se evalúan las certificaciones otorgadas, se establezca una moratoria a la certificación de nuevas plantaciones.

Dado que el Directorio del FSC parece no haber tomado resolución al respecto, varias organizaciones sociales y ambientales de diversas partes del mundo le enviaron una carta abierta al FSC solicitando la "moratoria a la certificación y re-certificación de plantaciones forestales".

Las organizaciones han decidido también iniciar una campaña de recolección de firmas para otra carta que será enviada al Grupo de Trabajo de la Revisión antes de la próxima reunión, que se realizará el 7 de noviembre en Madrid, España.

En la carta que fuera enviada al Directorio del FSC, las organizaciones plantean que: "Las plantaciones forestales industriales, con alto grado de mecanización y utilización de productos químicos, producen impactos negativos a nivel social y ambiental que no han sido cuantificados ni evaluados en forma adecuada aún, por lo que resulta imposible mitigar su impacto".

Se señala, además, que aunque los problemas causados por las plantaciones forestales industriales afectan también a países del norte: "Los problemas causados por las plantaciones industriales son generalmente más graves en el sur, donde los árboles crecen más rápidamente y las especies exóticas de rápido crecimiento alcanzan ciclos de rotación de hasta siete años. Este rápido crecimiento resulta en un alto grado de disminución de los nutrientes del suelo, que conducen a procesos de empobrecimiento del suelo conjuntamente con una pérdida de suelo superficial".

Como ejemplo se destaca que: "En Sudáfrica, más de un millón de hectáreas de plantaciones forestales industriales han sido certificados por el FSC y las empresas plantadoras usan el sello del FSC para promover sus productos como 'ambientalmente amigables'. Sin embargo, estas plantaciones han sido responsables de la escasez de los

recursos locales de agua, han disminuido las aguas subterráneas y secado innumerables humedales, arroyos y ríos, lo cual limita en forma severa el uso de la tierra y por ende pone en peligro el sustento de las poblaciones rurales”.

Finalmente se establece que: “Hay en el mundo una creciente y justificada oposición al incremento de plantaciones forestales y no podemos continuar aceptando que las plantaciones sean certificadas por el FSC usando los actuales defectuosos principios y criterios. Por lo tanto, la junta directiva del FSC debe suspender la certificación de las plantaciones industriales hasta que el proceso de revisión haya finalizado y los hallazgos y recomendaciones aprobadas ampliamente sean incorporados”.

En la carta que será enviada próximamente al Grupo de Trabajo de la Revisión, las organizaciones realizan un llamado urgente para que en caso de probarse que las plantaciones a gran escala -las certificadas y las no certificadas- son ambientalmente destructivas, socialmente injustas y además económicamente inviables –como es el caso de los países donde las plantaciones han sido subsidiadas- el FSC se retire de la certificación de plantaciones y “de-certifique” las plantaciones ya certificadas. Reafirman además el reclamo de una moratoria.

La carta se encuentra disponible en: <http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/cartacomite.html>

Las organizaciones que deseen adherir puede firmar a través de la página web del WRM o enviar su adhesión a Ana Filippini (anafili@wrm.org.uy) antes del día viernes 4 de noviembre de 2005.

● inicio